

mas severa al mismo delito: de siete años de prision, (artículo 694).

Por lo que el Procurador general es de opinion, que se debe confirmar la sentencia de segunda instancia.

México, Enero 2 de 1873.—*Altamirano.*

Es copia. Mexico, Setiembre 15 de 1873.

—*Alejo Gomez Eguarte.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Setiembre 6 de 1873. Vista la causa seguida contra D. Miguel Paz y Puente, D. Miguel Rojas, D. Juan A. Tamborrell, D. Manuel Ruiz, D. Adrian O. Farrill y D. Mariano Torres por falsificacion de papel sellado; la sentencia que pronunció en 1ª instancia el Juzgado de Distrito del Estado de Puebla en 18 de Noviembre de 1871, declarando compurgados del delito de falsificacion á los expresados Rojas y Paz y Puente con el tiempo que han sufrido de prision, debiendo pagar Paz y Puente en la oficina de papel sellado, el duplo del importe del papel que falsificó; y que era de absolverse del cargo á los demas encausados. Visto el fallo definitivo del Tribunal de Circuito del mismo Estado, fecha 11 de Junio de 1872, que confirmando el de su inferior en la parte que declaró absueltos del cargo á D. Juan A. Tamborrell, á D. Manuel Ruiz, á D. Adrian O. Farrill y á D. Mariano Torres, lo reforma en cuanto á D. Miguel Paz y Puente y á D. Miguel Rojas, imponiéndoles la pena de cuatro meses de rigorosa prision. Visto lo pedido ante esta 1ª Sala por el Sr. Fiscal en calidad de Procurador General interino, y con cuyo pedimento se ha conformado despues el Sr. Procurador General propietario; lo alegado por los defensores, con todo lo demas que de autos consta y ver convino y se tuvo presente. Se decreta: de conformidad con lo pedido por el Sr. Procurador General, y

por los propios legales fundamentos en que descansa la sentencia de vista pronunciada por el Tribunal de Circuito de Puebla en 11 de Junio del año próximo pasado, que es de confirmarse y se confirma en todas sus partes dicha sentencia, y la que en su parte resolutive falla:

Se impone á D. Miguel Paz y Puente y á D. Miguel Rojas, la pena de cuatro meses de rigorosa prision, con la obligacion de mas el primero, de satisfacer en la oficina respectiva, el duplo del valor del papel sellado que se le justificó habia falsificado; dándose por revisada esa misma sentencia, respecto de los demas procesados.

Devuélvanse las actuaciones al Tribunal de Circuito de donde proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; hágase saber y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los Sres. Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Setiembre 20 de 1873.
Alejo Gomez Eguarte.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado segundo de Distrito de México por D. Antonio Sanchez del Rio, contra la resolucion del Juzgado tercero de lo civil, en que dispuso la expedicion de cédula hipotecaria respecto de la casa número 11 de la Calle de Zuleta.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Visto el presente juicio de amparo promovido por el C. Antonio Sanchez del Rio, á virtud de reputar violadas en su persona

con los procedimientos dictados por el Juzgado 3º de lo civil, las garantías individuales que otorgan los artículos 14 y 27 de la Constitución; visto el informe rendido por dicho Juzgado; el pedimento fiscal, y visto en fin lo que versee convino; atendiendo: á que la violación de garantías en el caso, se hace consistir, en que habiéndose celebrado el contrato, origen de la demanda que en juicio hipotecario se le ha entablado al quejoso, con anterioridad al Código de Procedimientos vigente hoy, al no admitirse en este juicio las excepciones que el quejoso tenía adquiridas ni reconocérsele su personalidad al efecto, con tales procedimientos se le está haciendo aplicación de una ley dictada con posterioridad, y efectuándose una expropiación, ambos actos en contravención de los artículos 14 y 27 de la Constitución, y Considerando: primero, en cuanto al artículo 14: que si bien por este se determina la no retroactividad de las leyes, en su aplicación, debe tenerse presente que tal prevención no es extendible al caso de simples y verdaderos procedimientos, por que la retroactividad consiste en que por leyes posteriores se ataquen ó destruyan derechos legítimos y anteriormente adquiridos, y por tales no se entienden los meramente facultativos en cuya clasificación se comprenden los simples procedimientos de un juicio.

Considerando, segundo: que según el escrito de queja ó informe del Juzgado tercero de lo civil, la violación de garantías solo se funda en el procedimiento que con arreglo al Código respectivo se sigue en dicho Juzgado; y que en cuanto al artículo 27, no puede decirse verificada la expropiación que se supone, puesto que para ello aun en el caso de despojo material de la propiedad, es indispensable, constitucionalmente hablando, el que haya un reconocimiento previo por parte de la autoridad despojante, del dominio y propiedad del que se dice despojado, idea que corroboran las mismas frases ó

TOMO IV.—PARTE II.

términos que usa el artículo Constitucional al decir: "La propiedad de las personas no podrá ser ocupada sino por causa de utilidad pública y previa indemnización"; y debiendo por último tener presente: que la no admisión de las excepciones expuestas por el quejoso, en el juicio hipotecario que se sigue ante el Juzgado tercero, procedimiento en que se hace consistir la violación de garantías, no puede considerarse bastante en el caso, para el otorgamiento de amparo, puesto que aun siendo infracción del artículo Constitucional que se invoca, hasta que por la sentencia ó resolución definitiva del juicio se declare la no admisión de las citadas excepciones, puede decirse efectuado el acto, requisito indispensable para reputarse verificada ó no una violación de garantías, pues de lo contrario sería adelantarse á festinar una calificación. Por tales razones pues, se declara: que la Justicia de la Unión no ampara ni protege al C. Antonio Sanchez del Rio, contra los procedimientos dictados por el Juzgado 3º de lo civil, por no violarse con ellos en el caso, las garantías que consignan los artículos 14 y 27 de la Constitución que invoca el quejoso. Hágase saber, remítase copia de este fallo al "Diario Oficial y Semanario Judicial," y previa citación fiscal, elevénse los autos á la Corte Suprema de Justicia para su revisión. Lo decretó y firmó el C. Juez segundo de Distrito, Lic. José María Canalizo. Doy fé.—*José María Canalizo.*—*Fernando Zamora*, secretario.

Es copia. México, Agosto 18 de 1873.
—*Fernando Zamora.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Setiembre 8 de 1873. Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado 2º de Distrito de esta Ciudad por D. Antonio Sanchez del Rio contra los proce-

dimientos del Juzgado 3º de lo civil de esta Ciudad, que decretó la expedición de cédula hipotecaria contra la casa número 11 de la calle de Zuleta que fué de la Señora Doña Juana Escontría por el adeudo de capital y réditos que dicha casa reconoce á favor de D. Antonio Escandon, con cuyo decreto reputa el quejoso violadas las garantías á que se refieren los artículos 14 y 27 de la Constitución federal, y

Considerando, respecto de la garantía á que se refiere el artículo 27: que en el presente caso, no puede decirse propiamente vulnerada, porque se refiere á expropiación verdaderamente tal.

Considerando, respecto de la violación de la garantía á que se refiere el artículo 14: que la escritura por la que se pidió que se expidiera y en virtud de la que se mandó expedir la cédula hipotecaria, fué otorgada en 23 de Octubre de 1865 en cuya fecha aun no se habían promulgado los Códigos Civil y de Procedimientos del Distrito Federal; que si bien el Código de Procedimientos civiles ha introducido una innovación en el procedimiento hipotecario, tal innovación está íntimamente enlazada con la reforma radical que introdujo el Código Civil en el sistema hipotecario, mejorando notablemente la condición del acreedor, de modo que en este punto no pueden aplicarse las disposiciones del Código de Procedimientos á un negocio, sin considerar aplicables á él las del Código Civil, dándose por lo mismo efecto retroactivo no solo al Código de Procedimientos, sino también al Civil; por lo expuesto, y de conformidad con lo que ordena el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se reforma la sentencia pronunciada acerca de este juicio el 11 de Agosto próximo pasado, por el Juez 2º de Distrito de esta Ciudad que niega el amparo y se declara: que la Justicia de la Unión ampara y protege á D. Antonio Sanchez del Rio contra la resolución del Juzgado 3º de lo Civil, en que dispuso la expedición de cédula hipotecaria respecto de la casa núme-

ro 11 de la Calle de Zuleta de esta Ciudad, por el reconocimiento otorgado á favor de D. Antonio Escandon en la escritura de 23 de Octubre de 1865, por violarse la garantía individual que otorga el artículo 14 de la Constitución federal.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*José María del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia. México, Octubre 2 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de S. Luis Potosí por el C. Desiderio Altamirano, contra los procedimientos del C. Juez 1º de letras de la Capital de dicho Estado, por violación de garantías.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito del Estado.

El Promotor fiscal dice: que D. Desiderio Altamirano, solicita amparo de la Justicia federal, contra el hecho de estársele juzgando y habérsele decretado su prisión por el Sr. Juez primero de letras de la Capital, quien está conociendo criminalmente por responsabilidad en su mal manejo como empleado federal que fué el año de 1872,